



La Protección De Los Derechos Del Adolescente En La Jurisdicción Indígena

The Protection Of Adolescent Rights In Indigenous Jurisdiction

Katherine Vanessa Estrada Vizuite¹, Naily Alexandra León Guevara², Lizeth Tamara Ortega Buenaño³,
Kelly Mishell Ramos Barbecho⁴

¹Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). vanessa.estrada@unach.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0001-0604-3963>

²Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). naily.leon@unach.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0002-1996-8188>

³Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). lizeth.ortega@unach.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0006-6065-7073>

⁴Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). kelly.ramos@unach.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-9744-7122>

Resumen

El presente artículo científico hace un análisis sistemático del nivel de protección de los derechos fundamentales del adolescente, en el marco de la jurisdicción indígena ecuatoriana, desde una perspectiva jurídica, constitucional y de derechos humanos. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 instauró un sistema jurídico que reconoce el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena como una expresión legítima del derecho propio de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pero este reconocimiento histórico no ha venido acompañado de suficientes mecanismos normativos que garanticen la protección efectiva de los adolescentes en estos procesos, lo cual genera una brecha entre la norma y la realidad que es digna de ser examinada con rigor científico. La investigación identifica una tensión estructural de primer orden entre el ejercicio del derecho indígena y las obligaciones estatales emanadas de la Constitución de la República, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Se emplea una metodología jurídico-dogmática de corte cualitativo, sustentada en la revisión bibliográfica sistemática y el análisis crítico de fuentes normativas y jurisprudenciales de ámbito nacional e internacional publicadas en el período comprendido entre los años 2020 y 2025. Los resultados evidencian la existencia de vacíos normativos de primer orden, conflictos competenciales no resueltos entre jurisdicciones, limitada coordinación interinstitucional y escasa supervisión estatal sobre las decisiones comunitarias que involucran a adolescentes indígenas. Concluye que es indispensable diseñar e implementar mecanismos de articulación intercultural, que armonicen el ejercicio de la justicia indígena con las normas internacionales de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, sin menoscabo de la autonomía jurisdiccional reconocida constitucionalmente a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

Palabras clave: jurisdicción indígena; derechos del adolescente; pluralismo jurídico; interculturalidad; protección constitucional; interés superior del niño; Ecuador

Abstract

This scientific article presents a systematic analysis of the level of protection of fundamental adolescent rights within the framework of Ecuadorian indigenous jurisdiction, from a legal, constitutional, and human rights perspective. The 2008 Constitution of the Republic of Ecuador established a legal system that recognizes legal pluralism and indigenous jurisdiction as a legitimate expression of the customary law of indigenous communes, communities, peoples, and nationalities. However, this historical recognition has not been accompanied by sufficient normative mechanisms to guarantee the effective protection of adolescents in these processes, creating a gap between the law and reality that warrants rigorous scientific examination. The research identifies a significant structural tension between the exercise of indigenous law and the state obligations stemming from the Constitution of the Republic, the International Labour Organization (ILO) Convention 169, the Convention on the Rights of the Child, and the Organic Code for Children and Adolescents. A qualitative legal-dogmatic methodology is employed, based on a systematic literature review and critical analysis of national and international normative and jurisprudential sources published between 2020 and 2025. The results reveal significant regulatory gaps, unresolved jurisdictional conflicts, limited inter-institutional coordination, and insufficient state oversight of community decisions involving Indigenous adolescents. The study concludes that it is essential to design and implement intercultural articulation mechanisms that harmonize the exercise of Indigenous justice with international standards for the protection of the rights of children and adolescents, without undermining the jurisdictional autonomy constitutionally recognized for the Indigenous peoples and nationalities of Ecuador.

Keywords: indigenous jurisdiction; adolescent rights; legal pluralism; interculturality; constitutional protection; best interests of the child; Ecuador

1. Introducción

La aceptación constitucional de la jurisdicción indígena en el Ecuador es uno de los más grandes logros del constitucionalismo latinoamericano actual en materia de pluralismo jurídico y autonomía de los pueblos originarios. La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Montecristi en el 2008, tras un proceso constituyente de amplia participación ciudadana y de los pueblos indígenas, reconoció en su artículo 171, con rango constitucional, a la jurisdicción especial indígena y reconoció expresamente a las autoridades de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su respectivo ámbito territorial. Este reconocimiento constitucional no es un accidente histórico ni una concesión graciosa del Estado a sus minorías, sino la expresión directa del modelo de Estado plurinacional e intercultural adoptado en Montecristi, cuyo carácter transformador buscó superar definitivamente el monismo jurídico que había caracterizado la tradición jurídica ecuatoriana desde la época republicana y que había invisibilizado sistemáticamente las formas propias de organización social y resolución de conflictos de los pueblos originarios.

El constitucionalismo ecuatoriano de 2008, se enmarca en una corriente más amplia de reconocimiento del pluralismo jurídico en América Latina, que tiene como antecedentes la Constitución colombiana de 1991, la Constitución boliviana de 2009 y las reformas constitucionales que diversos países de la región han emprendido bajo la influencia de los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas y de las demandas históricas de los propios movimientos indígenas. En el caso ecuatoriano, el pluralismo jurídico se torna especialmente relevante, ya que forma parte de un Estado que se autodefine como plurinacional, reconociendo la convivencia de diferentes naciones dentro de una misma estructura política y administrativa. Esta definición implica que la jurisdicción indígena no es solo una modalidad alternativa de resolución de conflictos tolerada por el Estado, sino una expresión de la soberanía y autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas



sobre sus propios territorios, comunidades y conflictos internos, con la misma legitimidad constitucional que la jurisdicción ordinaria (Álvarez, 2020).

Sin embargo, cuando los sujetos involucrados en los procedimientos comunitarios son adolescentes, el ejercicio de esta especial jurisdicción plantea desafíos particulares y de notable complejidad jurídica. Esta protección reforzada que le otorga el ordenamiento jurídico nacional e internacional a este grupo etario, en virtud del principio del interés superior del niño consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica y las garantías jurisdiccionales específicas del sistema de responsabilidad penal juvenil, entra en una tensión sistémica con la autonomía jurisdiccional reconocida a los sistemas de justicia indígena. El caso plantea un problema jurídico de notable complejidad dogmática y práctica, que no se puede resolver mediante la simple subordinación de uno de los sistemas al otro, ni tampoco mediante el recurso a una jerarquía normativa rígida que ignore la especificidad cultural de los sujetos involucrados y el valor constitucional de la diversidad jurídica que el propio ordenamiento ecuatoriano reconoce y protege.

Para dimensionar el problema, debe considerarse que el Ecuador tiene 14 nacionalidades y más de 18 pueblos indígenas reconocidos, presentes en todas las regiones del territorio nacional, y cada uno de estos grupos tiene sus propios sistemas de normas, autoridades y procedimientos que regulan la vida comunitaria y la solución de conflictos; esta diversidad impide la elaboración de reglas generales para todos los casos y obliga a un enfoque que reconozca la especificidad de cada sistema, sin renunciar a la garantía de los estándares mínimos de protección reconocidos a los adolescentes por el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos.

En el nivel normativo, el marco jurídico vigente integrado por la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial (2009), el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Convenio 169 de la OIT (1989) y la Convención sobre los Derechos del Niño no define con suficiente claridad los límites competenciales de la jurisdicción indígena cuando los involucrados son menores de edad, ni los mecanismos de coordinación entre dicha jurisdicción y las instituciones estatales de protección de derechos. Esta laguna normativa no es fruto del descuido del legislador, sino la manifestación de una tensión política y jurídica más profunda entre el reconocimiento de la autonomía indígena y la universalidad de los derechos de la infancia, que el proceso constituyente de 2008 identificó pero no zanjó de forma definitiva.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, durante más de una década de decisiones jurisprudenciales, ha avanzado de forma progresiva en la delimitación de los criterios de convivencia entre la jurisdicción ordinaria y la indígena. Las Sentencias N.º 2-14-EI/21, n.º 658-17-EP/23 y No. 11-22-EI/24, marcan pasos importantes en este proceso de construcción jurisprudencial, estableciendo principios interpretativos, como el de interculturalidad, el de coordinación y cooperación entre los sistemas y el de respeto a la identidad cultural que guían la actuación de los operadores de justicia frente a la diversidad cultural. Sin embargo, y a pesar de estos avances, los pronunciamientos existentes no han abordado de manera específica y suficiente la situación de los adolescentes, quienes, por su condición de personas en proceso de desarrollo, requieren de garantías especiales que el sistema de justicia comunitaria no siempre está en condiciones de proveer de manera equivalente a las del sistema ordinario (Triviño y Barragán, 2025).

La relevancia académica, social y política de la presente investigación se centra en la imperiosa necesidad de desarrollar un modelo de articulación intercultural que respete tanto la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas reconocida como un derecho constitucional y un derecho colectivo de rango constitucional como los estándares mínimos de protección que emanan del bloque de constitucionalidad aplicable a la niñez y la adolescencia. En un Estado plurinacional que aspira, además, a ser un Estado de derechos y de justicia social, ningún adolescente debe ver menoscabados sus derechos fundamentales por la jurisdicción ante la cual se tramite su causa, ni ninguna comunidad indígena debe ver puesta en duda su autonomía por la imposición unilateral de categorías jurídicas ajenas a su cultura, historia y tradición. Esta doble exigencia constituye el motor de la

presente investigación y el parámetro desde el cual se evalúa la adecuación del marco jurídico e institucional vigente.

En consecuencia, el presente artículo tiene como objetivo general analizar el nivel de protección de los derechos del adolescente en el marco de la jurisdicción indígena ecuatoriana, con el fin de identificar los vacíos normativos e institucionales que limitan la garantía efectiva de sus derechos fundamentales y proponer los elementos constitutivos de un modelo de articulación intercultural que responda a las exigencias del Estado plurinacional. Con miras a alcanzar este objetivo general, se plantean tres objetivos específicos: (1) examinar el marco jurídico nacional e internacional aplicable a la protección de los derechos del adolescente en contextos de pluralismo jurídico; (2) identificar y analizar los conflictos normativos e institucionales entre el ejercicio de la jurisdicción indígena y los estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales de los adolescentes; y (3) determinar el rol actual de los organismos estatales en la supervisión y control del ejercicio de la justicia indígena respecto de los derechos adolescentes, identificando sus limitaciones y posibles vías de mejora. La estructura del artículo respeta esta secuencia de objetivos, entrelazando el análisis normativo con la revisión de la doctrina y la jurisprudencia más reciente de la que se disponga.

2. Metodología

El presente trabajo se enmarca en el paradigma cualitativo de la investigación jurídica, y adopta un enfoque jurídico dogmático orientado al análisis, interpretación crítica y sistematización del ordenamiento jurídico vigente en materia de protección de los derechos del adolescente, en la jurisdicción indígena ecuatoriana. El método central seguido es el jurídico-doctrinal o dogmático, que consiste en el análisis sistemático de las fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales con el fin de reconstruir el estado actual del derecho aplicable al objeto de estudio y detectar los problemas interpretativos y aplicativos que presenta y con este método se analiza la coherencia interna del sistema jurídico, se descubren las antinomias y lagunas normativas relevantes, y se crean propuestas de interpretación y solución basadas en los principios del ordenamiento constitucional.

Entre las fuentes principales consultadas podemos mencionar la Constitución de la República del Ecuador (2008), el Código Orgánico de la Función Judicial (2009), el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Convenio 169 de la OIT (1989) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), todos ellos integrantes del bloque de constitucionalidad ecuatoriano y, por tanto, de aplicación preferente sobre la legislación ordinaria. En el terreno jurisprudencial se estudiaron con especial cuidado las Sentencias No. 2-14-EI/21. N° 658-17-EP/23 y N° 11-22-EI/24 de la Corte Constitucional del Ecuador, elegidas por tratarse de las decisiones más recientes y relevantes sobre la delimitación del ámbito competencial de la jurisdicción indígena y los criterios de coordinación entre jurisdicciones (Corte Constitucional del Ecuador, 2021; 2023; 2024).

La técnica de recolección de información fue la revisión bibliográfica sistemática, desarrollada en tres etapas: búsqueda y localización de fuentes, selección y filtrado según criterios predefinidos, y fichaje y análisis del material seleccionado. Para la búsqueda se utilizaron artículos científicos publicados, preferentemente, entre los años 2021 y 2025 en bases de datos académicas de reconocido prestigio: Scielo, Dialnet, Redalyc, Latindex, repositorios institucionales de universidades ecuatorianas y latinoamericanas y plataforma de resoluciones de la Corte Constitucional del Ecuador. Los criterios de inclusión tuvieron en cuenta: (a) actualidad temporal, privilegiando las publicaciones del período 2021-2025; (b) pertinencia temática directa con la jurisdicción indígena, el pluralismo jurídico o los derechos de niñez y adolescencia en contextos interculturales; (c) rigor académico verificable a través del arbitraje por pares de las publicaciones seleccionadas; y (d) accesibilidad plena del texto. Los criterios de exclusión descartaron fuentes sin respaldo institucional acreditable, materiales sin proceso de revisión científica y trabajos cuyo objeto de estudio no tuviera vinculación directa con el tema investigado. Como excepción metodológicamente justificada, se incluyeron fuentes anteriores a 2021 cuando se trataba de instrumentos normativos vigentes, jurisprudencia constitucional de referencia estructural o trabajos doctrinales de importancia fundacional para la comprensión del objeto de estudio.



La información se analizó mediante un procedimiento que se desarrolló en tres fases metodológicas, secuenciales e interrelacionadas: a) Recolección, ordenación temática por ejes y fichado del material bibliográfico y normativo seleccionado; b) Análisis e interpretación crítica de las fuentes respecto de cada uno de los objetivos específicos de la investigación, detectando convergencias, divergencias y vacíos en la literatura revisada; y c) Síntesis argumentativa y triangulación de los hallazgos para la elaboración de los resultados, la discusión comparativa y las conclusiones. La triangulación de fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales permitió contrastar los hallazgos desde distintos ángulos y construir una argumentación jurídica sólidamente fundamentada que supera los límites de cualquiera de las fuentes consultadas de manera aislada. Este proceso metodológico asegura la coherencia interna de los resultados y la consistencia de las conclusiones planteadas.

3. Resultados Y Discusión

El marco jurídico nacional e internacional aplicable a la protección del adolescente en la jurisdicción indígena

El pluralismo jurídico como principio estructural del ordenamiento constitucional ecuatoriano

Con la Constitución de 2008, el Ecuador se erigió como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Esta definición constitucional de múltiples dimensiones no es meramente declarativa ni retórica: implica el reconocimiento del pluralismo jurídico como principio estructural del ordenamiento, lo que supone la coexistencia legítima y constitucionalmente garantizada de múltiples sistemas normativos dentro del Estado. En el presente modelo, la jurisdicción indígena no procede de una delegación estatal, ni de una excepción a la regla del monopolio estatal de la jurisdicción, sino de un derecho colectivo preexistente de los pueblos y nacionalidades indígenas, cuya titularidad es reconocida y no creada por la Constitución. Es fundamental hacer esta distinción conceptual: el Estado ecuatoriano no da la jurisdicción indígena, la reconoce como una realidad jurídica y social que existía antes que el propio Estado republicano. Este entendimiento debe guiar todo examen de los límites y alcances del ejercicio de la jurisdicción indígena y de su relación con los derechos de los adolescentes (Álvarez, 2020).

La Constitución de la República (2008) en su artículo 171 reconoce expresamente, que las autoridades de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y derecho propio, en su respectivo ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Esta norma determina, al mismo tiempo, los límites constitucionales explícitos de este ejercicio: la jurisdicción indígena no puede transgredir los derechos constitucionales, en particular los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. La referencia expresa a estos grupos como titulares de una protección reforzada frente a eventuales excesos de la jurisdicción indígena muestra la preocupación del constituyente por los sujetos más vulnerables históricamente dentro de las propias comunidades. Esta cláusula limitativa configura el estándar mínimo de protección al que deben sujetarse las decisiones comunitarias cuando el afectado es un adolescente, con independencia de su identidad cultural o de la tradición jurídica de su comunidad de pertenencia.

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009), en los artículos 343 al 346, regula los principios de la jurisdicción indígena: diversidad, igualdad, non bis in idem, pro jurisdicción indígena e interpretación intercultural. La combinación de estos principios da como resultado que, cuando exista una duda sobre si un asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria o a la indígena, la norma favorezca a esta última. Sin embargo, esta preferencia normativa no es de aplicación automática cuando se trata de adolescentes, pues el principio constitucional del interés superior del adolescente, puede exigir, bajo determinadas circunstancias, que se tramite el caso ante el sistema que ofrezca mayores garantías de protección para el menor. Uno de los vacíos normativos más importantes del sistema es que el Código Orgánico de la Función Judicial no contempla esta excepción expresamente. Minga y Reyes (2025) afirman que las barreras externas al ejercicio de la jurisdicción indígena son, precisamente, la ausencia de normativa secundaria que regule su articulación con el sistema de protección

de derechos de la niñez y adolescencia, lo que genera zonas grises de difícil solución para los operadores de justicia.

Vega y Montúfar (2024) estudian el conflicto de competencia entre la jurisdicción indígena y la ordinaria en el Ecuador, señalando que uno de los problemas más recurrentes es la falta de criterios claros para determinar cuándo procede la declinación de competencia y cuáles son los límites materiales y personales de la jurisdicción indígena. Los autores señalan que la jurisprudencia constitucional ha avanzado en este punto, pero que la aplicación práctica de los criterios establecidos tiene dificultades importantes en los casos más complejos, especialmente cuando confluyen varios factores de vulnerabilidad tales como la edad del involucrado, su género o la gravedad del conflicto.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos y el estándar mínimo de protección del adolescente

El sistema internacional de protección de los derechos humanos provee un marco normativo de doble naturaleza que resulta directamente aplicable al objeto de la presente investigación: los instrumentos específicos sobre derechos de los pueblos indígenas en especial el Convenio 169 de la OIT (1989), y por otra, los instrumentos de protección de la infancia y adolescencia principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y sus Protocolos Facultativos. La aplicación conjunta de estos dos órdenes normativos en los casos que involucran a adolescentes indígenas ante la jurisdicción comunitaria, produce una tensión normativa que requiere de su resolución a través de criterios hermenéuticos específicos, antes de que el intérprete pueda determinar cuál es el régimen jurídico aplicable al caso concreto.

El Convenio 169 de la OIT (1989), que forma parte del bloque de constitucionalidad ecuatoriano, es el instrumento internacional de referencia en materia de derechos de los pueblos indígenas y tribales. El artículo 8 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus propias costumbres e instituciones, en tanto éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos por el sistema jurídico interno, ni con los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. El artículo 9 añade que, en la medida de lo compatible con el sistema jurídico nacional, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

El principio del interés superior del niño, establecido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Ecuador en 1990 e integrada al bloque de constitucionalidad, es la consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños, adoptadas por cualquier institución pública o privada, con independencia de su naturaleza jurisdiccional, administrativa o comunitaria. El principio es universal y no admite excepciones basadas en la identidad étnica, cultural o religiosa de quienes estén involucrados. En su artículo 30, la CDN reconoce específicamente el derecho de los niños pertenecientes a minorías étnicas a tener su vida cultural, a profesar y practicar su religión y a utilizar su idioma; no obstante, este derecho no puede interpretarse de forma tal que excluya la aplicación de las garantías fundamentales del debido proceso consagradas en el resto del instrumento. El artículo 40 de la CDN desarrolla detalladamente las garantías específicas del proceso de justicia juvenil: presunción de inocencia, derecho a ser informado de los cargos, derecho a asistencia jurídica, prohibición de ser obligado a declarar contra sí mismo y derecho a una revisión de la decisión por parte de una autoridad superior. Estas garantías son el mínimo inderogable que todo sistema de justicia, incluido el indígena, debe respetar cuando se trata de un adolescente.

Los sistemas de justicia indígena operan en la realidad con frecuencia con lógicas de resolución de conflictos que privilegian la restauración comunitaria por encima de la sanción individual, la reparación colectiva frente a la compensación personal y el diálogo asambleario por encima del proceso adversarial. Pero, por otro lado, la falta de garantías procesales formales equivalentes a las del sistema ordinario puede generar situaciones de indefensión para el adolescente, especialmente cuando el conflicto es grave, cuando el adolescente no cuenta con el apoyo de su familia o cuando la decisión comunitaria no es susceptible de revisión por una instancia superior. Según Jerez (2021), la aplicación del Convenio 169 de la OIT en el Ecuador debe superar el dilema entre la

universalidad de los derechos y el relativismo cultural, construyendo una interpretación intercultural que sea a la vez respetuosa de la autonomía indígena y garante de los derechos fundamentales del adolescente.

Granados (2025) se detiene a examinar los criterios hermenéuticos desarrollados por la Corte Constitucional colombiana para regular la convivencia entre la jurisdicción ordinaria y la indígena, señalando que el denominado test de procedibilidad exige verificar no solo la pertenencia cultural del sujeto a la comunidad indígena, sino también la existencia de instituciones, usos y costumbres propios dentro del sistema indígena capaces de garantizar el juzgamiento del caso con un mínimo de garantías equivalentes a las del sistema ordinario.

Conflictos normativos e institucionales entre la jurisdicción indígena y los estándares de protección del adolescente

Conflicto de competencia material

El análisis del marco jurídico vigente permite identificar como el primer y más evidente conflicto el de la competencia material no resuelta para los casos en que la persona imputada, la víctima o el afectado directo en un procedimiento comunitario es un menor de edad. La legislación ecuatoriana no da una respuesta normativa clara y operativa a la pregunta de cuándo la jurisdicción indígena es competente para conocer estos casos, en qué condiciones procede la declinación de competencia y qué consecuencias jurídicas se derivan cuando la jurisdicción indígena conoce un caso que involucra a un adolescente sin contar con las garantías equivalentes exigidas por el sistema de responsabilidad penal juvenil. Esta omisión normativa deja un vacío que los operadores de justicia deben llenar caso a caso, con el riesgo de decisiones divergentes y, eventualmente, violatorias de derechos.

Los operadores de justicia han aplicado de forma heterogénea la declinación de competencia a favor de la justicia indígena en Ecuador, sin que existan criterios uniformes que permitan garantizar que la decisión se adopte invariablemente en función del interés superior del adolescente, como lo documentan Cedeño y cols. (2025). Esta heterogeneidad no es solo un problema de eficiencia del sistema: es, en primer lugar, un problema de igualdad ante la ley, pues los adolescentes que se encuentran en situaciones fácticas similares reciben respuestas jurídicas radicalmente distintas según el territorio y el operador de justicia que conozca el caso. Hayes (2021) indica, por su parte, que el ámbito competencial de la jurisdicción indígena en materia penal ha sido objeto de múltiples interpretaciones contradictorias en la doctrina y la jurisprudencia de varios países andinos, sin que se haya llegado a un consenso sobre los criterios de determinación de competencia en casos que involucran a sujetos de protección especial como los adolescentes.

La tensión de la competencia se agudiza cuando el adolescente es, a la vez, miembro de la comunidad indígena y titular de derechos especiales que el sistema ordinario le reconoce en razón de su edad. En estos casos, que son los más frecuentes y los que plantean mayores problemas de solución práctica, la determinación de la jurisdicción competente implica escoger entre dos sistemas que otorgan al adolescente distintos tipos y niveles de protección, sin que exista una regla de prelación clara que garantice que la elección se hará en función de cuál es el sistema que protege mejor sus intereses en el caso concreto. No es neutral para los derechos la ausencia de esta regla: la ausencia de criterio legal expreso hace que la tendencia espontánea de los operadores pueda ir ya sea hacia la declinación automática o hacia la retención automática, por desconfianza hacia la justicia comunitaria, y ninguna de ellas garantiza por sí sola la protección efectiva del adolescente, pues no se sustenta en un análisis del caso concreto orientado por el principio del interés superior.

La tensión entre autonomía jurisdiccional indígena y el principio del interés superior del adolescente

El segundo conflicto que surge del análisis es de carácter principiológico y se manifiesta en la tensión existente entre el principio de autonomía jurisdiccional indígena, reconocido constitucionalmente mediante el artículo 171 de la Constitución y desarrollado en los artículos 343 al 346 del Código Orgánico de la Función Judicial, y el



principio del interés superior del adolescente, consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República y en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ninguno de estos principios es absoluto ni puede ser dejado de lado en un sistema jurídico que reconoce simultáneamente la plurinacionalidad del Estado y la universalidad de los derechos de la infancia, pero cuando ambos principios apuntan en direcciones distintas respecto de un caso concreto, el ordenamiento vigente no ofrece un mecanismo de ponderación específico y culturalmente pertinente que oriente la decisión del operador de justicia. Las prácticas comunitarias de resolución de conflictos, aunque legítimas desde el punto de vista del derecho propio y del reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena, pueden no garantizar, bajo determinadas circunstancias, los estándares mínimos de protección exigidos para los menores de edad por la normativa internacional (Lazo, 2020).

Este hecho no supone un juicio negativo generalizado sobre la institución de la justicia indígena: en muchos casos y para muchas comunidades las formas comunitarias de resolución de conflictos ofrecen al adolescente un entorno más cercano, un proceso menos traumático y una respuesta más orientada a la rehabilitación y reintegración que el sistema penal ordinario, sobre todo cuando este carece de recursos especializados en el ámbito rural.

Llasag (2020) ha sugerido que la interpretación intercultural de la justicia indígena dentro de la Corte Constitucional del Ecuador debe trascender la perspectiva centrada en la simple comprobación formal del cumplimiento de normas externas, y orientarse hacia un verdadero intercambio intercultural que posibilite descubrir al interior de los propios sistemas indígenas los instrumentos y postulados de protección que aseguran el bienestar del adolescente desde una óptica culturalmente adecuada. La relevancia metodológica de esta propuesta se debe a que reconoce que los sistemas de justicia indígena pueden disponer de sus propios mecanismos de protección de la infancia, diferentes de los del sistema ordinario, pero no necesariamente inferiores en eficacia, y que es preferible identificar y fortalecer los mismos antes que meramente imponer desde fuera categorías jurídicas ajenas. Pero este diálogo intercultural genuino requiere condiciones institucionales espacios formales de encuentro, protocolos de actuación conjunta, mecanismos de seguimiento que no existen actualmente de forma sistemática en el Ecuador.

La perspectiva de género e interseccionalidad aporta otra capa de complejidad que no puede dejar de considerarse en el análisis. Las adolescentes indígenas se encuentran en una posición de vulnerabilidad múltiple y acumulada, por su condición etaria, por su condición de género y por su pertenencia a un grupo étnico históricamente marginado por el sistema jurídico estatal. Esa triple vulnerabilidad puede tener un reflejo particular en los procesos ante la justicia indígena, sobre todo cuando se trata de casos de violencia de género o de violencia intrafamiliar, donde las propias estructuras de poder comunitario pueden no garantizar la imparcialidad y equidad del proceso desde la perspectiva de la adolescente. De acuerdo con Jiménez Rodrigo (2022), las políticas de igualdad de género deben ser implementadas desde una perspectiva interseccional que tenga en cuenta la especificidad de las situaciones de desventaja múltiple, principio que se aplica directamente al diseño de cualquier mecanismo de articulación entre la jurisdicción indígena y el sistema estatal de protección de los derechos de los adolescentes.

La insuficiente coordinación interinstitucional entre jurisdicciones

El tercer conflicto identificado es de orden institucional y práctico, y tiene que ver con la poca coordinación, informal y no sistematizada entre la jurisdicción indígena y las instituciones estatales de protección de derechos de la niñez y adolescencia. Si bien el artículo 171 de la Constitución establece que el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas, esta obligación es bidireccional: implica tanto el respeto por parte del Estado hacia las decisiones indígenas como la obligación del Estado de garantizar que dichas decisiones no vulneren los derechos constitucionales de personas que el propio Estado tiene la obligación de proteger de manera especial, como son los adolescentes.



Según Ochoa y Buján (2023), los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia penal ordinaria y la justicia indígena en el Ecuador son escasos, carecen de suficiente instrumentalización normativa y dependen excesivamente de la voluntad y del conocimiento individual de los operadores de justicia que intervienen en cada caso. Estas situaciones de informalidad institucional se agravan de forma notable cuando el caso involucra a adolescentes, ya que las instituciones estatales especializadas en protección de la niñez como el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, la DINAPEN o el Ministerio de Inclusión Económica y Social no disponen de protocolos definidos ni de capacidades operativas específicas para intervenir de manera preventiva o concurrente en procedimientos tramitados ante las autoridades indígenas.

Otro elemento crítico que la coordinación interinstitucional debe abordar con prioridad es la dimensión intercultural de la formación de los operadores de justicia. Según Quintero y cols. (2024), la educación intercultural en América Latina tiene desafíos importantes para lograr una verdadera inclusión y justicia social, lo cual repercute directamente en la formación de los funcionarios judiciales, tanto ordinarios como indígenas, que intervienen en casos que afectan a adolescentes. En este contexto, la capacitación sistemática en derecho indígena, en perspectiva intercultural y en derechos de la niñez y adolescencia, resulta una condición estructural necesaria para la articulación efectiva entre ambos sistemas. Sin esta formación, la coordinación interinstitucional corre el riesgo de reproducir los sesgos etnocentristas del sistema ordinario o, en el extremo opuesto, de deferir acríticamente a las decisiones comunitarias sin examinar su compatibilidad con los derechos del adolescente.

El rol de los organismos estatales en la supervisión del ejercicio de la justicia indígena respecto de los derechos del adolescente

Los mecanismos constitucionales de supervisión y sus limitaciones estructurales

La Constitución de la República del Ecuador impone al Estado la obligación ineludible de asegurar que las decisiones de la jurisdicción indígena no vulneren los derechos constitucionales de las personas, especialmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El mecanismo de control constitucional más utilizado para revisar decisiones de la justicia indígena que supuestamente vulneran derechos fundamentales ha sido la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, prevista en el artículo 94 de la Constitución y desarrollada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009). Las Sentencias N.º 2-14-EI/21 y N.º 11-22-EI/24 evidencian la aptitud de este mecanismo para funcionar como un verdadero control de constitucionalidad sobre las decisiones comunitarias, aptitud que le permite anular decisiones de autoridades indígenas cuando estas vulneren derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Sin embargo, la eficacia de este mecanismo como herramienta de protección de los derechos de los adolescentes, muestra limitaciones estructurales imposibles de ignorar: es un control de naturaleza posterior, que actúa una vez que el procedimiento comunitario ha concluido; requiere de conocimiento jurídico especializado para ser activado; y tiene acceso limitado en las comunidades alejadas de los centros urbanos, donde los recursos económicos y el acceso a asistencia jurídica son insuficientes para ejercerlo de forma efectiva. Según Ponce y cols. (2025) la acción de protección como garantía jurisdiccional de derechos constitucionales enfrenta obstáculos de acceso que limitan su efectividad como mecanismo de tutela, especialmente para los adolescentes indígenas que habitan en territorios remotos y carecen de los recursos y el conocimiento necesarios para activar el sistema.

La Corte Constitucional ha ido construyendo progresivamente criterios interpretativos para la coexistencia armónica entre jurisdicciones. La Sentencia N.º 658-17-EP/23 desarrolló el principio de interculturalidad en procesos penales en contra de personas pertenecientes a comunidades indígenas, estableciendo que la identidad cultural es un derecho que debe ser garantizado por el sistema de justicia ordinaria y que los procesos que involucran a personas indígenas deben incorporar criterios de pertinencia cultural en su tramitación. Este pronunciamiento sentaría las bases para una interpretación progresiva que integre la perspectiva intercultural en



la garantía de los derechos de los adolescentes indígenas, pero no aborda de manera específica la situación de los menores de edad ante la jurisdicción comunitaria (Corte Constitucional del Ecuador, 2023). La sentencia núm. 11-22-EI/24 extendió los criterios de delimitación del ámbito competencial de la jurisdicción indígena en materia penal, pero tampoco se pronunció de manera específica sobre la situación de los adolescentes como sujetos de especial protección, dejando esta cuestión para futuros pronunciamientos.

Análisis jurisprudencial de las sentencias seleccionadas

- **Sentencia No. 2-14-EI/21: Propiedad colectiva indígena e indivisibilidad como límite interno**

La Sentencia No. 2-14-EI/21 de la Corte Constitucional del Ecuador analiza el alcance de la propiedad colectiva indígena y los límites constitucionales aplicables a las decisiones comunitarias. El caso se originó en una resolución de la Comuna Tunibamba (Imbabura), que distinguía entre “socios” y otros comuneros, restringiendo el acceso a tierras comunitarias únicamente a los primeros. La Corte concluyó que esta medida vulneraba el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad colectiva reconocido en el artículo 57 de la Constitución (CC., 2021). A través del test de igualdad, determinó que la diferenciación carecía de justificación objetiva y que afectaba especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. Además, el fallo destaca que las garantías de la propiedad colectiva incluida la indivisibilidad también limitan las decisiones internas de las comunidades. En este sentido, la indivisibilidad no solo impide la fragmentación jurídica del territorio, sino también exclusiones de hecho dentro del colectivo (CC., 2021). Como medida de reparación, se dejó sin efecto la resolución y se ordenó su difusión institucional. El pronunciamiento reafirma que la autonomía indígena está sujeta al control constitucional cuando se afectan derechos fundamentales.

- **Sentencia No. 658-17-EP/23: Interculturalidad como exigencia en la motivación judicial**

En la Sentencia No. 658-17-EP/23, la Corte Constitucional resolvió una acción extraordinaria de protección presentada por un ciudadano de la nacionalidad shuar contra una decisión judicial en un proceso de hábeas corpus. La Corte determinó que se vulneró el derecho al debido proceso, específicamente la garantía de motivación (CC., 2023). El análisis se centró en tres elementos que deben evaluarse en casos de privación de libertad: las circunstancias de la detención, las condiciones actuales de la persona detenida y su contexto particular. La Corte evidenció que la decisión impugnada no desarrolló un análisis suficiente de estos aspectos, limitándose a argumentos generales.

Ahora bien, especial relevancia tuvo la omisión del principio de interculturalidad. La Corte estableció que este no es un elemento opcional, sino un componente obligatorio de la motivación judicial en casos que involucran a personas indígenas (CC., 2023). Asimismo, reiteró que la privación de libertad debe ser considerada una medida excepcional en estos contextos. El fallo posiciona la interculturalidad como un estándar de control constitucional. En el voto concurrente se añadió que este enfoque exige evaluar medidas alternativas a la prisión preventiva y considerar la participación de autoridades indígenas en el proceso (CC., 2023).

- **Sentencia No. 11-22-EI/24: Ámbito territorial y competencia de la jurisdicción indígena**

La Sentencia No. 11-22-EI/24 examina los límites de la jurisdicción indígena en función de su ámbito territorial. El caso se relaciona con una decisión de la Comuna Gulacpamba sobre la adjudicación de un predio, la cual fue impugnada mediante acción extraordinaria de protección. La Corte desestimó la acción y validó la actuación de la justicia indígena (CC., 2024). Uno de los principales aportes del fallo es la definición del ámbito territorial como un concepto dinámico; la Corte señaló que este no se restringe a límites geográficos formales, sino que debe analizarse considerando la relación histórica, cultural y social de la comunidad con el territorio. Asimismo, se reconoció que la jurisdicción indígena

puede conocer asuntos que, en principio, corresponderían a la justicia ordinaria, siempre que exista un vínculo comunitario relevante y se respete el carácter participativo del proceso.

El fallo tiene implicaciones importantes: por un lado, amplía el alcance de la jurisdicción indígena; por otro, evidencia posibles tensiones cuando las decisiones afectan a personas que no participaron en el proceso, especialmente si pertenecen a grupos de atención prioritaria. Los votos disidentes reflejan que la delimitación de esta competencia aún se encuentra en desarrollo dentro de la jurisprudencia constitucional (CC., 2024).

Las instituciones especializadas y su presencia efectiva en territorios indígenas

La Defensoría del Pueblo y la DINAPEN cuentan con competencias formales en materia de protección de derechos de la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional, independientemente del sistema jurisdiccional que tramite el caso. Sin embargo, la presencia real y la capacidad operativa de estas instituciones en los territorios indígenas es mucho menor que en los núcleos urbanos, lo que crea una brecha de protección que afecta de forma desproporcionada a los adolescentes de las comunidades rurales e indígenas (Granados, 2025). Esta brecha no es sólo geográfica, sino también cultural, puesto que los funcionarios de estas instituciones no siempre poseen la formación intercultural necesaria para comprender y respetar las lógicas propias de los sistemas de justicia indígena, lo cual dificulta la construcción de relaciones de confianza y colaboración con las autoridades comunitarias.

El Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, tiene la responsabilidad de elaborar los lineamientos y protocolos necesarios para que los jueces ordinarios que conocen solicitudes de declinación de competencia en casos que involucran a adolescentes, tengan criterios claros, objetivos y culturalmente pertinentes para sustentar su decisión. Sin embargo, hasta la fecha no se han elaborado lineamientos específicos en esta materia, lo que genera disparidad de criterios entre los distintos distritos judiciales y riesgo de desprotección sistemática para los adolescentes indígenas. En efecto, como señalan Triviño Rodríguez y Barragán Pacheco (2025), si bien la jurisprudencia constitucional ha avanzado en la definición de principios generales para la articulación entre jurisdicciones, queda pendiente la tarea institucional de plasmar dichos principios en protocolos operativos aplicables a la situación específica de los adolescentes, tarea que el Consejo de la Judicatura debe asumir con carácter prioritario.

Según Mendoza y Campos (2025), el planeamiento estratégico en la modernización de las políticas públicas es importante, ya que es una condición necesaria para la efectividad de las reformas institucionales. Esta perspectiva es directamente aplicable al diseño de políticas públicas de articulación intercultural entre sistemas de justicia: sin un planeamiento estratégico que defina metas claras, indicadores de seguimiento, responsables institucionales y recursos suficientes, cualquier propuesta de reforma normativa o institucional corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo sin traducirse en mejoras concretas en la protección efectiva de los derechos de los adolescentes indígenas.

4. Conclusiones

El marco jurídico ecuatoriano, si bien reconoce constitucionalmente tanto la jurisdicción indígena como los derechos especiales de los adolescentes, presenta vacíos normativos de notable relevancia al no establecer un régimen específico y operativo para los casos en que estos dos ámbitos se superponen, ya que la ausencia de legislación secundaria que delimite con precisión el fuero indígena en materia de niñez y adolescencia, que establezca criterios claros de declinación de competencia cuando los involucrados son menores de edad y que defina los estándares mínimos de protección exigibles a la jurisdicción comunitaria en estos casos, constituye el déficit jurídico más urgente identificado en la investigación.



Los conflictos normativos e institucionales identificados, entre los que se encuentran el conflicto de competencia material no resuelto, la tensión principiológica entre la autonomía jurisdiccional y el interés superior del adolescente, así como la escasa coordinación interinstitucional entre sistemas, no constituyen una expresión de incompatibilidad intrínseca entre el derecho indígena y la protección de los adolescentes. Por el contrario, responden a la insuficiencia del marco de articulación entre ambos sistemas y a la falta de voluntad política e institucional para desarrollarlo de manera sistemática.

El rol de los organismos estatales en la supervisión del ejercicio de la justicia indígena respecto de los derechos del adolescente es formalmente reconocido por el ordenamiento constitucional, pero prácticamente limitado por un conjunto concurrente de factores: la naturaleza exclusivamente posterior de los mecanismos de control constitucional disponibles, las barreras de acceso geográficas y culturales que dificultan la activación de estos mecanismos por parte de los adolescentes indígenas, la ausencia de protocolos institucionales para la actuación preventiva de las entidades especializadas en protección de niñez y adolescencia en territorios indígenas, y la insuficiente formación intercultural de los operadores de justicia que intervienen en los puntos de articulación entre sistemas, de modo que la superación de estas limitaciones requiere una reforma institucional orientada de manera deliberada a fortalecer la presencia, capacidad operativa y pertinencia cultural de las instituciones de protección de derechos en los territorios donde habitan los adolescentes indígenas.

La dimensión de género e interseccionalidad merece una atención específica y prioritaria en el diseño de cualquier propuesta de reforma del marco normativo e institucional, dado que las adolescentes indígenas ocupan una posición de vulnerabilidad múltiple y acumulada que los sistemas jurídicos, tanto el ordinario como el indígena, no abordan de manera integral en la actualidad, por lo que cualquier propuesta de articulación intercultural que no incorpore una perspectiva de género explícita y operativa será, en el mejor de los casos, incompleta y, en el peor, reproductora de las desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a las adolescentes en los contextos comunitarios y que el derecho constitucional e internacional tiene el mandato de erradicar.

5. Referencias Bibliográficas

- [1]. Álvarez Lugo, Y. (2020). Pluralismo jurídico posdesarrollista en la Constitución de Montecristi. Foro: Revista de Derecho, (34), 7-23.
- [2]. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008.
- [3]. Asamblea Nacional del Ecuador. (2009). Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento No. 544, 9 de marzo de 2009.
- [4]. Asamblea Nacional del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro Oficial Suplemento No. 52, 22 de octubre de 2009.
- [5]. Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia No. 2-14-EI/21. Quito, Ecuador.
- [6]. Corte Constitucional del Ecuador. (2023). Sentencia No. 658-17-EP/23: La interculturalidad en los procesos penales en contra de personas pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
- [7]. Corte Constitucional del Ecuador. (2024). Sentencia No. 11-22-EI/24. Jueza ponente: Daniela Salazar Marín. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gob.ec>
- [8]. Cedeño-Núñez, C. R.-G. (2025). La declinación de competencia a favor de la Justicia Indígena en Ecuador: Análisis jurídico y social. Sociedad y Tecnología, 8(S2), 525-538. <https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/650>



- [9]. Granados, J. S. (2025). Criterios hermenéuticos para la coexistencia entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción indígena en Colombia. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 11(3). <https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/1152>
- [10]. Hayes, S. M. (2021). El ámbito competencial de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina en materia penal. *Revista Lex*, 4(13), 179-196. <https://www.revistalex.org/index.php/revistalex/article/view/88>
- [11]. Jerez Pilla, K. F. (2021). La jurisdicción indígena y la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Trabajo de titulación de grado). Universidad Nacional de Loja.
- [12]. Jiménez Rodrigo, M. L. (2022). Políticas de igualdad de género e interseccionalidad: estrategias y claves de articulación. *Convergencia*, 29. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-14352022000100008&script=sci_arttext
- [13]. Lazo, F. S. (2020). Los límites de la justicia indígena en el Ecuador. *Polo del Conocimiento: Revista Científico-Profesional*, 5(8), 1134-1169.
- [14]. Llasag Fernández, R. T. (2020). Interpretación intercultural de la justicia indígena en la Corte Constitucional del Ecuador. *Cahiers des Amériques latines*, (94), 157-174.
- [15]. Mendoza Casas, B. Y., y Campos Velásquez, W. J. (2025). Planeamiento estratégico y su impacto en la modernización de las políticas públicas educativas: Una revisión sistemática. *Aula Virtual*, 6(13). https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S2665-03982025000102064&script=sci_arttext
- [16]. Minga Sarango, S. C., y Reyes Idrovo, M. G. (2025). Las funciones jurisdiccionales de las autoridades de justicia indígena: barreras externas para el ejercicio pleno de este derecho. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 6(18), e250439. <https://doi.org/10.46652/pacha.v6i18.439>
- [17]. Ochoa-Andrade, E. I., y Buján-Matos, F. (2023). Mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia penal ordinaria y la justicia indígena. *IUSTITIA SOCIALIS*, 8(1), 27-42. https://www.fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/article/view/2484
- [18]. Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio núm. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
- [19]. Ponce, G. A. A., Cedeño, P. L. G., y Arteaga, L. M. G. (2025). La acción de protección como garantía jurisdiccional de los derechos constitucionales. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 7(4), 366-375. <http://www.editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/1596>
- [20]. Quintero, A. R. T., Quiñónez, O. G. A., Valencia, K. P. Q., Chamorro, C. R. Z., y Medina, C. E. M. (2024). Educación Intercultural en América Latina: Avances, Desafíos y Perspectivas Futuras para la Inclusión y la Justicia Social. *Código Científico Revista de Investigación*, 5(E4), 644-657. <http://revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/view/514>
- [21]. Triviño Rodríguez, K. G., y Barragán Pacheco, J. I. (2025). Las justicias indígenas en Ecuador: jurisprudencia de la Corte Constitucional. *Iuris Dictio*, 36. <https://doi.org/10.18272/iu.i36.3722>
- [22]. Vega-Montúfar, S., y Montúfar, M. (2024). Jurisdicción indígena en el Ecuador: El conflicto de competencia. *MQRInvestigar*, 8(2), 2970-2990.